

EL CONFLICTO DE INTERESES ENTRE INDÍGENAS Y CAMPESINOS EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO EN BOLIVIA

*Fabiola Escárzaga**

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo analizaremos la manera en que, luego de la tendencial confluencia en el proceso de lucha desarrollado por distintos sectores indígenas y campesinos entre 2000 y 2005 contra el neoliberalismo y por la descolonización del estado en Bolivia, desde el inicio de los trabajos de la Asamblea Constituyente en 2006 comenzaron a manifestarse posiciones encontradas y lecturas sectoriales distintas sobre estas demandas, que expresan intereses crecientemente enfrentados y tendencialmente irreconciliables. El nuevo texto constitucional, las leyes reglamentarias y las políticas implementadas por el gobierno de Evo Morales han afirmado tales diferencias y formulado un proyecto de reconstitución del Estado-nación que expresa los intereses de los sectores campesinos que buscan afirmar su condición de propietarios privados de la tierra que han colonizado para la producción de hoja de coca

* Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento de política y Cultura, Área Problemas de América Latina (fabiolaescarzaga@yahoo.com.mx).

y otros productos comerciales y desarrollar procesos de acumulación capitalista, a costa de los intereses de los sectores indígenas de tierras bajas que luchan por defender sus territorios ancestrales y mantener sus condiciones materiales de vida.

LA CONFORMACIÓN DE LOS SUJETOS ÉTNICOS EN LA LARGA DURACIÓN

En los países andinos, el contraste entre las condiciones de producción y de vida de los pueblos indios de la selva amazónica y los de la sierra andina es muy marcado y corresponde a diferentes tradiciones civilizatorias: los primeros fueron o son todavía cazadores-recolectores y los segundos han sido y son campesinos, unos son nómadas y otros sedentarios, unos son miles y otros son millones. Ambas tradiciones son producto de procesos seculares de adaptación de las poblaciones originarias a las condiciones impuestas por sus contrastados medios naturales, y en su acción colectiva han creado las instituciones y la tecnología comunitaria adecuada para la satisfacción de sus necesidades materiales. Su interacción equilibrada con la naturaleza permitió la vida humana y animal y la producción y reproducción de su cultura sin afectar a la naturaleza durante siglos y, por el contrario, contribuyó con su praxis a su regeneración.¹

A lo largo de los siglos hubo interacciones entre los habitantes de tierras altas y bajas; su sobrevivencia requirió del intercambio de productos disponibles sólo en uno de esos espacios. Este intercambio se resolvió por el comercio y también a través de la guerra. La llegada del hombre blanco a partir de la Conquista española comenzó a alterar en gran escala las condiciones de esa

¹ Zulema Lehm Ardaya, *Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonía boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la marcha indígena por el territorio y la dignidad*, La Paz, Apcob-CiddeBeni-Oxfam América, 1999.

coexistencia: la producción agrícola y la extracción de minerales, destinados a los mercados externos, significó el despojo creciente de sus territorios para crear latifundios cuyos habitantes fueron sometidos a la esclavitud y a la servidumbre en diversas variantes. La evangelización convirtió a una parte de los cazadores-recolectores, nómadas de la selva, en campesinos sedentarios, y forzó a los de tierras altas a someterse a la población blanca.²

Desde mediados del siglo XX, en la medida en que las tierras altas se agotaban y la población campesina aymara y quechua crecía, se dieron procesos migratorios cada vez más intensos desde la sierra hacia la Amazonía, eran migraciones espontáneas motivadas por la falta de tierras de cultivo para los campesinos, y/o promovidas por los gobiernos centrales como estrategia de concentración de tierras por las élites dominantes para la posterior especulación con la propiedad agraria.³ El resultado fue que los campesinos de tierras altas, acostumbrados a unas condiciones de vida particulares (entre 2500 y 4000 msnm y de clima frío) se vieron obligados a emigrar a regiones que ofrecían condiciones materiales de vida muy distintas para colonizar tierras “vírgenes”, tumbiar la selva o la ceja de selva y volverla tierra agrícola, lo cual implicaba con frecuencia un traumático proceso de adaptación y cambio cultural. El discurso oficial consistía en que esas tierras estaban “vacías” y era necesario poblarlas, pero en realidad estaban habitadas por grupos cazadores recolectores.

Se impusieron así contactos más intensos entre ambos grupos en el territorio amazónico y se establecieron relaciones de rivali-

² Félix Patzi Paco, *Insurgencia y sumisión. Movimientos sociales e indígenas 1983-2007*, 2ª ed. ampliada, La Paz, Ediciones Yachaywasi y Aidesep, 2007.

³ La concentración de la propiedad de la tierra por las élites blancas en el oriente, inició en 1953 como consecuencia de la reforma agraria, el gobierno central otorgó créditos a la propiedad legalizada e invirtió en infraestructura para crear la agroindustria de exportación. Ese apoyo gubernamental no lo tuvieron los campesinos aymaras y quechuas que desarrollaron la colonización como estrategia de supervivencia frente al agotamiento de las tierras disponibles en sus regiones de origen.

dad y disputa por el territorio bajo la hegemonía de los grandes latifundistas. Asimismo, desde los discursos de los grupos dominantes se estimularon las diferencias entre unos y otros indígenas para mantenerlos separados y divididos, extraños unos a otros, para enfrentarlos entre sí, en razón de sus diferencias culturales. Cada grupo elaboró discursos identitarios que subrayaron las diferencias con el otro y afirmaron sus prejuicios.

A partir de los años setenta, los aymaras de tierras altas, al re-tomar elementos del discurso indianista,⁴ incrementaron su capacidad organizativa sustentada en sus estructuras comunitarias y sindicales bajo el katarismo⁵ y desarrollaron estrategias de lucha más contundentes y de confrontación con los sucesivos gobiernos militares o civiles, alcanzando una creciente autonomía política mediante sus propios partidos, discursos y proyectos de transformación, separados de los grupos políticos mestizos de centro, derecha o izquierda.

⁴ Un hito fundamental en el proceso de construcción de una identidad aymara radical fue el discurso indianista formulado en los años sesenta por Fausto Reinaga, quien al efectuar una relectura de la historia de Bolivia desde la perspectiva del indio, postuló la existencia de dos Bolívias enfrentadas de manera irreconciliable, la blanco-mestiza europeizada y la kolla-autóctona o india. Cuestionó a las élites por su condición colonizada, es decir, su incapacidad para construir un Estado y una nación soberanos frente al dominio del capital extranjero; y objetó su mentalidad colonial, expresada en su aversión al trabajo y en la apropiación parasitaria de la riqueza producida por los indios, herencia de sus antepasados hispanos, que se traduce en su incapacidad para dirigir la producción material; también denunció el racismo de las élites que justifica la opresión de los indios en su supuesta inferioridad, y perpetúa sus privilegios, debatió la denominación de campesinos impuesta a los indios con la reforma agraria de 1953 y reivindicó el término indio como autodenominación. Reinaga participó y propuso como estrategia la creación de un partido político indio, para dejar de ser carne de cañón electoral o masa movilizable de los partidos mestizos, es decir, construir su autonomía política. Fausto Reinaga, *La Revolución india*, 4^a ed., La Paz, MINKA y Fundación Amaútica Fausto Reinaga, 2010.

⁵ Que recupera la figura del caudillo aymara Tupak Katari y de su pareja Bartolina Sisa, quienes dirigieron la rebelión anticolonial a fines del siglo XVIII.

En El Chapare, ceja de selva del departamento de Cochabamba, los campesinos cocaleros, integrados por contingentes provenientes de los valles quechuas, del altiplano aymara y de los mineros despedidos, se organizaron colectivamente para afrontar las tareas de la colonización, trasladando las formas comunitarias de organización y producción a la zona colonizada, y con esa fuerza colectiva desarrollaron estrategias de autodefensa comunitaria a fin de enfrentar a los gobiernos neoliberales en los noventa para detener las políticas de erradicación violenta de los cultivos de hoja de coca, decidida, supervisada y financiada por el gobierno norteamericano. Asumieron la demanda de libertad para cultivar la hoja de coca, argumentaban llevar a la práctica el principio básico del capitalismo que es la libertad de empresa, en tanto la producción de hoja de coca era el cultivo más rentable y tenían derecho a elegir qué producir. También justificaban la producción en el consumo tradicional por parte de la población indígena como un mercado legítimo.

El proceso organizativo de los indígenas del oriente es más reciente, son menos numerosos, están dispersos y han sido más dependientes de la asesoría de las ONG para organizarse y luchar por sus reivindicaciones. Se afirmaron así estrategias de lucha diferenciadas, producto de procesos históricos y condiciones de vida disímiles. Más tarde, la acción de las ONG profundizó y naturalizó las diferencias y el conflicto entre los distintos sectores.

Las políticas gubernamentales multiculturales de los años noventa acentuaron la separación entre ambos sectores al favorecer de manera casi exclusiva a los pueblos indígenas del oriente como beneficiarios de las políticas de reconocimiento⁶ y como interlocutores del gobierno, por ser ellos negociadores, pacíficos y

⁶ Ley de Participación Ciudadana, Ley de Reforma Agraria, creación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), Ley de Reforma Educativa.

minoritarios,⁷ en perjuicio de los de occidente, radicales, beligerantes y mayoritarios, a los que se les negó incluso la condición de indígenas, en tanto la reforma agraria de 1953 les había impuesto la identidad de campesinos, y se consolidó la separación.⁸

El espacio emblemático de la fricción entre campesinos aymaras y quechuas de tierras altas y los nativos amazónicos está conformado por las zonas de tierras bajas en las que se desarrollaron procesos de colonización por migrantes andinos para la producción de la hoja de coca y otros productos comerciales, que inician en los años cincuenta, se intensifican en los setenta y continúan, hasta hoy, estimulados por la demanda de hoja de coca para la producción de cocaína y por el crecimiento demográfico y el agotamiento de tierras disponibles. Por los atributos de cada sector ya señalado, el enfrentamiento producido entre ellos al disputar la tierra en esos espacios, que ha sido posesión de los nativos, es una confrontación entre fuerzas desiguales, porque los migrantes andinos son más aptos para imponer sus intereses y dinámicas productivas sobre los nativos amazónicos, puesto que representan “la fuerza modernizadora del mercado”.

DE LAS ALIANZAS POPULARES A LA SEPARACIÓN

Los campesinos aymaras y quechuas de tierras altas e indígenas de tierras bajas y sus organizaciones permanecieron separados y confrontados aún en el periodo de la movilización entre 2000 y 2005, cada uno representando su región, sector e identidad. A pesar de esto, lograron unirse en la Coordinadora del Gas, un mecanismo de articulación de fuerzas sociales para hacer confluir sus movili-

⁷ Están conformados por 30 grupos étnicos, el mayor de los cuales es el guaraní, en conjunto representan 2% de la población, hay entre ellos grupos étnicos minoritarios conformados por cientos o incluso decenas de individuos.

⁸ Patzi, *op. cit.*

zaciones, lo que logró la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y estableció en la Agenda de octubre de 2003 las demandas comunes de la movilización. Poco después, en septiembre de 2004 se creó el Pacto de Unidad⁹ con la finalidad de articular las movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno de Carlos Mesa (2003-2005). Ya con Evo Morales en la presidencia, tal instancia elaboró en mayo de 2006 una propuesta consensuada de Constitución, entregada el 5 de agosto del mismo año a los constituyentes del MAS, que sintetizaba las reivindicaciones centrales de los sectores indígenas movilizados en el periodo anterior: incluía la autonomía indígena, representación parlamentaria directa, control de recursos naturales en territorios indígenas, derechos colectivos y pluralismo jurídico. Así como el control del aparato estatal y su instrumentalización como medio para solucionar la pobreza y para garantizar la recuperación del control de los recursos naturales.¹⁰

En mayo de 2007 el gobierno de Morales creó la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) que incorporó al Pacto de Unidad, de esta manera institucionalizó su alianza con las organizaciones indígenas y campesinas. Tal instancia fue presentada como el mecanismo de participación de las bases de las organizaciones sociales en la toma de decisiones del gobierno, pero en los hechos fue el mecanismo de subordinación de las organizaciones al gobierno, perdiendo de esta manera la autonomía política conquistada antes en sus luchas. Con el interés puesto en concretar sus demandas sectoriales en la nueva Constitución, las organiza-

⁹ Integrado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIQB-“BS”), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

¹⁰ Salvador Schavelzon, *La Asamblea Constituyente de Bolivia: etnografía del nacimiento de un Estado plurinacional* (Tesis de doctorado en Antropología Social, Universidad Federal de Río de Janeiro, 2010).

ciones acataron la lógica gubernamental, pero no eran consultadas sobre las decisiones gubernamentales, simplemente se les instruía sobre la manera de responder a las iniciativas políticas del gobierno: la movilización bajo consignas impuestas desde arriba cuando el gobierno lo consideraba necesario para enfrentar a la derecha; y vigilancia, persecución y castigo a quienes dentro de las organizaciones de base cuestionaran las decisiones del gobierno y de sus dirigencias. Pronto, su función fue enfrentar a las organizaciones disidentes y reemplazar a las direcciones rebeldes, en una nueva etapa del paralelismo sindical practicado antes con las organizaciones campesinas indígenas.¹¹ De esa manera las organizaciones que antes fueron autónomas y representativas de los diversos sectores, se convirtieron en mecanismos de control desde arriba. Veamos los mecanismos de este proceso de subordinación.

De la numerosa lista de organizaciones mencionadas en la nota anterior, como parte del Pacto de Unidad, quedaron reducidas a cinco, como representativas o eventualmente aglutinadoras del resto: CSUTCB, Bartolinas, Colonizadores, CONAMAQ y CIDOB y, como señalamos antes, es significativo que no se considere a los cocaleros, como si quedaran subsumidos en las tres primeras o como si estuvieran en otro nivel, tal vez porque las dirige y representa el presidente de Bolivia. En las discusiones y disputas de la Constituyente, por las demandas o por la denominación de los sujetos, en la información en la prensa, en las autorreferencias, las identidades más diversas quedaron polarizadas en dos grupos: los campesinos, en las tres primeras organizaciones, y los indígenas, en las dos últimas, donde el CONAMAQ representa a los indígenas de tierras altas y la CIDOB a los de tierras bajas. Como por arte de magia, los nuevos tiempos borraron el hecho de que la CSUTCB y las Bartolinas estaban integradas en el periodo de la movili-

¹¹ Felipe Quispe señala que luego de asumir él la jefatura de la CSUTCB en 1998 y ante la imposibilidad de controlarlo, el grupo cocalero, encabezado por Evo Morales, estableció una CSUTCB paralela que acatara sus consignas. Entrevista, 2007.

ción por comunarios aymaras que se reclamaban kataristas, es decir, que eran también indígenas o se autoidentificaban como tales.

Más allá de las formas en que el discurso oficial encubre las identidades y los cambios producidos en las organizaciones correspondientes, en el proceso boliviano actual podemos distinguir en el ámbito rural tres grupos fundamentales de pequeños productores y propietarios agrarios, que han sido los protagonistas del proceso de cambio:

- Los indígenas nativos de la Amazonía y en general de las tierras bajas, que fueron o son cazadores recolectores y los pequeños productores en que han devenido en los territorios que poseen.
- Los campesinos indígenas aymaras y quechuas comunitarios poseedores de su espacio en tierras altas (altiplano y valles).
- Los campesinos colonizadores y/o cocaleros con ascendencia indígena que provienen de tierras altas y están asentados en tierras bajas.

Estas tres identidades han elaborado proyectos políticos (demandas mínimas y máximas) y estrategias de lucha que derivan de su ser social, de las formas y estrategias con las que obtienen sus medios de vida, en que garantizan su reproducción material y producen, y están marcados también por los intereses que deben enfrentar para lograrlo, lo que deriva de y se plasma en su cosmovisión (su vida material produce su cosmovisión y ellos la reproducen de manera consciente).

Una variable a considerar y de influencia creciente es la presión del mercado y el modo de la participación de cada grupo en él. Otra variable son los cambios políticos y legislativos. El gobierno de Evo Morales y su proyecto político (que ha cambiado con el paso del tiempo en las tres gestiones que ha ejercido) ha influi-

do de manera radical en las características de estas identidades, modificando la fuerza de cada uno y, por tanto, la correlación de fuerzas entre ellos. El cambio más visible en los tres grupos es la reducción de la capacidad de autonomía política que habían alcanzado cada uno de ellos en la etapa previa.

La polaridad entre indígenas y campesinos también se expresó en el Pacto de Unidad que elaboró el proyecto de Estado plurinacional durante la Asamblea Constituyente, y que resultó altamente conflictiva porque sus intereses eran divergentes. Lo que en la etapa de la movilización impidió la articulación orgánica, ahora se convertía en un choque cotidiano. CIDOB y CONAMAQ asumieron un papel propositivo y las organizaciones campesinas desempeñaron un papel pasivo o de plano reactivo, porque consideraban contrarias a sus intereses las propuestas de las otras dos organizaciones indígenas. Por su parte, los kataristas radicales estaban fuera de la Asamblea, su perspectiva fue excluida.¹² Shavelzon menciona que Evo Morales en 2006 subrayó públicamente la diferencia de estatus entre las organizaciones en una reunión con los constituyentes en Cochabamba, en la que señaló que “los indígenas son los impulsores y los campesinos los que se movilizarán y la defenderán”. También establece el hecho de que mientras que las tres organizaciones campesinas eran “orgánicas” al MAS, las indígenas no lo eran, y por ello no participaban en sus congresos o sus instancias de decisión y no formaban parte del Estado.¹³

No obstante tal división, el proceso constituyente, amenazado desde el exterior por la derecha en su realización misma, pudo esconder o postergar el conflicto entre el gobierno y las organizacio-

¹² Los términos de la convocatoria a la Asamblea no cumplieron con la demanda popular en torno al carácter no partidista de la representación y de esa manera se excluyó a las organizaciones de base y se incorporó a elementos dispuestos a participar bajo el membrete del MAS y de acatar sus lineamientos, lo que propició la clientelización y cooptación de cuadros por el nuevo gobierno, desplazó y neutralizó a los dirigentes radicales de las mismas.

¹³ Schavelzon, *op. cit.*, pp. 84 y 85.

nes indígenas. El gobierno carecía de un proyecto constitucional propio y de interés por formularlo, por ello el proyecto que quedó plasmado en la Constitución fue elaborado por las organizaciones indígenas, y fueron ellas las que dieron la pelea contra la derecha y al interior de la constituyente frente a los representantes de los campesinos y colonizadores que en algunos casos rechazaron explícitamente o no acompañaron sus reivindicaciones.

La confrontación al interior de la Constituyente entre la derecha y el bloque indígena fue intensa, mientras que el gobierno permanecía al margen, situación que retrasó por siete meses el inicio de la Asamblea Constituyente y su aprobación. Finalmente, la aprobación de la nueva Constitución en 2009 fue negociada entre el gobierno y la derecha en el Congreso, y en ella el gobierno sacrificó demandas centrales para la población indígena. Se modificaron cerca de 180 artículos de un total de 411. El punto más significativo fue el carácter no retroactivo de los límites de la gran propiedad agraria en el oriente, lo que canceló la posibilidad de la reforma agraria demandada por la población indígena (del occidente) y estableció una alianza tácita del gobierno con los grandes latifundistas. Otros puntos modificados afectaban las demandas de los indígenas del oriente en relación con la defensa de la reconstitución territorial indígena de CIDOB y CONAMAQ, sus propuestas sobre autonomía indígena y la representación directa indígena en las cámaras alta y baja del parlamento.

De esa manera inició el distanciamiento entre el gobierno y diversos sectores indígenas, que se ha ido profundizando a medida que el gobierno avanza en la reglamentación del texto constitucional y en la toma de decisiones y la aplicación de políticas públicas que se alejan de las aspiraciones indígenas o van definitivamente en contra de ellas y que por eso podría considerarse más bien como un conflicto de clase. Schavelzon ilustra este conflicto con el hecho de que la CSUTCB fuera dirigida desde el inicio del gobierno de Morales y hasta 2010 por el mestizo cruceño Isaac Ávalos, vincula-

do al comercio de tierras; y la Confederación de Colonizadores de Bolivia, lo fuera por Fidel Surco, dueño de una empresa de transporte en los Yungas de La Paz.¹⁴ De manera que eran totalmente ajenos al indianismo katarista que, desde su fundación en 1979 y hasta el 2005 bajo la conducción de Felipe Quispe,¹⁵ había orientado sus luchas y, por el contrario, expresaba la forma subordinada de relación con el gobierno establecida por el nacionalismo revolucionario de 1952 y con los gobiernos militares a partir de 1964, ambos cuestionados por los kataristas. Lo que ahora se denomina indianismo katarismo mantiene una condición marginal, en un nivel intelectual y universitario, pero no tiene posibilidades de incidir en organizaciones de base. La estrategia del gobierno ha sido eficiente para privar a esta perspectiva de su anterior fuerza y autonomía.

Así, se produjo un cambio acelerado en los sujetos a partir del gobierno de Evo Morales, y los que antes se autoidentificaron como indígenas (sincera o pragmáticamente), como estrategia política central, pasaron a la afirmación de sus intereses de clase como campesinos propietarios individuales de tierras y ya no comunitarios. La separación entre indígenas y campesinos ha sido una decisión tomada desde arriba, desde el gobierno, y se ha convertido en el proyecto del antes autodenominado “gobierno de los movimientos sociales” o el “gobierno indígena”, contradiciendo en la práctica tales autodenominaciones. El primer paso en este proceso ocurrió en 2010, cuando la CIDOB protagonizó la VII marcha indígena en reclamo de la reapertura de los debates sobre la Ley Marco de Autonomías que fue cancelada por decisión del gobierno.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, p. 86.

¹⁵ Con el desplazamiento de Felipe Quispe de la dirección de la CSUTCB y con la desaparición del partido creado y dirigido por él, el Movimiento Indio Pachakuti (MIP), la dirección radical y autónoma perdió toda posición en las organizaciones sindicales y la posibilidad de participar en la Constituyente.

¹⁶ Marxa Nadia Chávez León, “Lo indígena en Bolivia: identidades entre la institucionalización y la autodeterminación”, 2013.

EL NOMBRE IMPORTA

Un hecho sintomático de este complejo proceso es la disputa sobre quién es el sujeto que encabeza, o a quién representa el gobierno de Evo Morales; es la intensa discusión que se dio en la constituyente sobre el término que denominaría en la Constitución a los sujetos protagónicos del “proceso de cambio”. La denominación consensada fue “pueblos y naciones indígena originario campesinos”, que entre otras cosas, sepulta o pretende hacerlo la denominación de “indio”, propuesta por el discurso indianista de Fausto Reinaga en 1970, base de la afirmación de la autonomía política del katarismo, y que fue retomada por el proyecto radical de la CSUTCB de Felipe Quispe en los albores del siglo XXI, y que dirigió las luchas del 2000 al 2005.¹⁷

La nueva denominación llevó en 2008 al cambio de nombre de dos de las cinco organizaciones del Pacto de Unidad: así, los colonizadores, para no ser incongruentes con el proceso de “descolonización” del Estado, optaron por el nombre más multicultural de “Interculturales”, llamándose ahora Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB); la organización de mujeres incluyó el término indígena originario, quedando como Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIQB-“BS”), y aprovecharon para redefinir los objetivos de su organización,¹⁸ al incluir la defensa del proceso de cambio ante posibles amenazas de desestabilización y la gestión de proyectos que puedan beneficiar

¹⁷ Véase Fabiola Escárzaga, “Comunidad indígena y revolución en Bolivia: el pensamiento indianista-katarista de Fausto Reinaga y Felipe Quispe”, en *Política y Cultura*, núm. 37, México, 2012.

¹⁸ Resoluciones del Congreso Nacional Orgánico de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Santa Cruz, 29 y 30 de noviembre, 2008.

a todas sus afiliadas.¹⁹ Es decir, la defensa del gobierno y la defensa de sus intereses sectoriales.

Así, por esta vía los sectores comunitarios aymaras y quechuas que fueron representados en la etapa de lucha por la CSUTCB y las Bartolinas, quedaron desplazados y sin voz en las organizaciones del Pacto en el gobierno de Morales. Precisamente cuando constitucionalmente se define una nomenclatura inclusiva de la diversidad étnica, y el gobierno integra formalmente a través del Pacto de Unidad a los distintos sujetos, la política gubernamental separa drásticamente, con sus medidas económicas y políticas, a indígenas y campesinos, y asume a los segundos como la base social real del gobierno.

La separación avanza, como lo evidencia la petición de la CSUTCB al gobierno, en abril de 2011, de revisar los límites y extensión de las Tierras Comunitarias de Origen, para poder así llevar a cabo un nuevo reparto agrario, que va en deterioro y pone en peligro la integridad de los territorios indígenas y parques nacionales²⁰ reconocidos en la etapa neoliberal, anticipando lo que vendría después. Sorprendentemente, los campesinos de tierras altas reclaman al gobierno la apertura de la frontera agrícola para acceder a nuevas tierras, pero no le exigen que las tierras sean las del latifundio, que quedó intocado, sino que se avance sobre los territorios de los nativos de las tierras bajas.

El conflicto por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en 2011 y 2012, colocó en su verdadera di-

¹⁹ Después de las elecciones de marzo de 2015, en las que perdió la candidata del MAS a la gubernatura del departamento de La Paz, la dirigente aymara Felipa Huanca, quien había dirigido a las Bartolinas y al Fondo Indígena, se destapó el escándalo de corrupción en este último por el desvío de recursos destinados a tales proyectos productivos hacia fines electorales.

²⁰ Bolpress, “El gobierno y la CSUTCB planean recortar las TCO indígenas”. En <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011080401> y Bolpress; “Golpe al plan agrario comunitario” (fecha de consulta: 8 de abril, 2011). En <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011042002> (fecha de consulta: 20 de abril, 2011).

mención el conflicto de intereses entre ambos grupos, las incongruencias del gobierno y su estrategia de confrontación. El 15 de agosto de 2011, los habitantes del TIPNIS iniciaron la VIII Marcha Indígena Originaria, para impedir la construcción de un tramo carretero que uniría Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) y atravesaba el Parque, iniciada sin consultar previamente a los afectados, y provocaría destrucción ecológica y las condiciones de vida de las poblaciones indígenas asentadas allí, por el despojo de sus territorios ancestrales.

Durante la marcha, el presidente se negó sistemáticamente a ir al encuentro de los marchistas para dialogar y negociar como ellos solicitaban, argumentando falta de tiempo. En su lugar envió a distintos ministros que no tenían capacidad de decisión. En cambio, fue personalmente en dos ocasiones a encontrarse en actos masivos con los cocaleros y colonizadores de la zona en conflicto para mostrar en los medios de comunicación el apoyo de esos sectores a la ejecución de la obra, presentando ante la opinión pública la decisión del gobierno de construir la carretera como respuesta a la demanda de desarrollo y acceso a servicios como educación y salud de esos sectores. El presidente Evo Morales acusó a los indígenas del TIPNIS que se oponían a la construcción del tramo de la carretera por defender sus derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT y en la nueva Constitución, de ser “enemigos del desarrollo”. Desde el inicio de la marcha, las organizaciones cocaleras y las de los colonizadores amenazaron y agredieron a los marchistas, bloqueando su recorrido e impidiendo su acceso a los poblados habitados por ellos. Estas provocaciones crearon un clima de tensión que estalló el 25 de septiembre con la represión policial de la marcha. De esta manera, el presidente Morales promovió la idea de un conflicto de intereses entre indígenas y campesinos, estimuló la confrontación entre ellos, tomó partido por los campesinos y colocó como su enemigo a los indígenas.

La movilización contra la carretera suscitó un gran apoyo en su recorrido y en la ciudad de La Paz, lo que obligó al gobierno a retroceder, pero sólo temporal y tramposamente.²¹ Para enfrentar la renovada intención del gobierno de construir la carretera a través de una consulta, se realizó una nueva marcha indígena desde Trinidad a La Paz, la IX, entre abril y junio de 2012, que en sus mejores momentos tuvo una participación de mil personas. Esta vez, ya no fue la policía la encargada de su represión, sino colonizadores y organizaciones indígenas que eran parte de la CIDOB, los que obstruyeron la marcha, cooptados por el gobierno. Durante la IX marcha se implementó una consulta amañada que aprobó la construcción del tramo carretero.²² Si bien ésta quedó paralizada,²³ la embestida extractivista contra los territorios y las organizaciones indígenas continuó; se intensificó la estrategia de paralelismo sindical, promoviendo la división de las organizaciones, el desprestigio de los dirigentes y su criminalización, reemplazándolos por otros sumisos cooptados mediante prebendas. También se excluyó a la CIDOB y el CONAMAQ de los programas de financiamiento a cargo del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), institución gubernamental.²⁴

²¹ Para parar la protesta, el presidente promulgó el 24 de octubre de 2011 la Ley 180 de Protección del parque. Pero el 10 de febrero de 2012 promulgó la Ley 222 de Consulta Previa para decidir si la carretera Cochabamba-Beni atraviesa o no el TIPNIS.

²² Según el Informe Final emitido por el Gobierno, de 69 comunidades existentes en el parque, 58 fueron consultadas, “57 rechazaron la intangibilidad y 55 aceptaron la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Una comunidad pidió mantener la intangibilidad y tres expresaron su desacuerdo con la carretera”.

²³ En junio de 2015 se inició la construcción de la carretera por un trazo modificado respecto al proyecto anterior, ahora de San Ignacio de Moxos a Santo Domingo (departamento del Beni), en *La Razón*, “Tipnis. Gobierno de Evo acelera construcción de carretera por territorio indígena”, junio de 2015. En <http://eju.tv/2015/06/tipnis-gobierno-de-evo-acelera-construccion-de-carretera-por-territorio-indigena/>.

²⁴ *Los Tiempos*, “Conflicto por el TIPNIS. Los hechos de la IX Marcha Indígena”, Cochabamba, 28 de junio, 2012. En http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120628/los-hechos-de-la-ix-marcha-indigena_176596_372601.html.

Como resultado de las marchas del TIPNIS se produjo la salida del Pacto de Unidad de la CIDOB y del CONAMAQ que fueron parte de la marcha; mientras que la CSUTCB, la FMCB-BS y la CSCIB, llamadas “las trillizas”, se manifestaron como aliadas incondicionales del gobierno. Luego de la ruptura del Pacto de Unidad, la CONAMAQ estableció una nueva agenda, y llamó a recuperar la “Agenda de Octubre”, síntesis de las demandas de la movilización elaborada durante la “Guerra del Gas” de octubre de 2003, y que ahora la separan de los autores de la misma, la CSUTCB y las Bartolinas:

- La defensa y reconstitución de los territorios de las comunidades, *ayllus* y *markas* indígenas, contra la expansión de los proyectos extractivistas, columna del proyecto económico, social y político del gobierno del MAS.
- Respeto a las autoridades originarias.
- Consulta previa verdaderamente libre e informada.
- Propuestas alternativas a la Ley Minera presentada por el gobierno.
- Rechazo a los proyectos de exploración y explotación minera e hidrocarburífera.²⁵

No deja de sorprender la caracterización sobre el conflicto del TIPNIS hecha por el vicepresidente García Linera en 2012, quien acusó a los nativos de contrarrevolucionarios y los responsabilizó de la falta de visión sobre el conjunto nacional que exige la compatibilización de intereses particulares, función del Estado. Los satanizó también por ser corporativos cuando el gobierno es el que promueve el corporativismo de los sectores elegidos como aliados:

La ruta trágica de la historia se desenvuelve de tal manera que la contrarrevolución puede venir de la mano de una facción de sus propios

²⁵ Chávez, *op. cit.*

constructores que, sin necesariamente proponérselo, como consecuencia de la exacerbación de su particularismo corporativo, regional o sectorial, y al no tomar en cuenta el despliegue general de las correlaciones de fuerzas sociales totales a nivel nacional e internacional, acaban defendiendo los intereses de las fuerzas conservadoras de la derecha y terminan socavando su propio proceso revolucionario. Esto es justamente lo que viene sucediendo con la denominada “marcha del TIPNIS”.²⁶

EL NUEVO SUJETO: TENSIONES CREATIVAS O LUCHA DE CLASES

Como ya señalamos, los indígenas de tierras bajas y los comuneros aymaras y quechuas de tierras altas fueron convertidos en enemigos por el gobierno, en cambio los cocaleros y colonizadores fueron asumidos como sujetos de su proyecto, cambiando radicalmente su peso político. Los cocaleros pasaron de ser un sector criminalizado a ser la base social fundamental del gobierno y cambiaron sus viejas demandas por la extensión de la frontera agrícola a costa de los territorios indígenas, para apropiarse de tierras y practicar en ellas cultivos rentables de acuerdo con el mercado. Si antes, como colonizadores, tuvieron a su favor la ausencia del Estado, hoy tienen a su favor la acción del “nuevo” Estado plurinacional de Evo Morales.

Cocaleros y colonizadores constituyen la base social para la creación de una burguesía chola²⁷ en Bolivia, no a partir del enfrentamiento con la oligarquía terrateniente del oriente ni con el capital extranjero, a los que el gobierno no afecta, sino por la participación en el despojo de territorios y tierras indígenas y co-

²⁶ Álvaro García Linera, *Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2012.

²⁷ Mestiza.

munidades campesinas, en un nuevo ciclo de acumulación por desposesión,²⁸ para convertirlos en fuerza de trabajo aprovechable por los agentes económicos que los requieran, en este caso capital transnacional. También se desarrollan procesos de diferenciación social al interior de los grupos cocaleros y colonizadores.

Esta apuesta por la creación de una burguesía nacional a partir de la expropiación de tierras indígenas, muestra la convergencia entre la lectura de la izquierda tradicional de los indios como obstáculo al desarrollo, y la del sujeto colonizador que es Evo Morales, quien asume su superioridad cultural frente al otro diferente, dando continuidad a la mirada conservadora impuesta a los diferentes sectores indígenas entre sí, como ajenos y enemigos que disputan un mismo espacio. Cada uno de estos sectores tiene una mirada prejuiciada sobre los otros, que fue construida desde los intereses de la dominación, como planteamos anteriormente. Lo novedoso es que la apuesta del gobierno de Morales es convertir esos prejuicios en realidades sociales, en las polaridades clasistas que se han creado en los últimos años. De ahí que el “gobierno indígena” sería el instrumento para el acceso al poder de la burguesía chola que ha acumulado capital desde hace mucho tiempo a partir del comercio informal y el contrabando, pero sin tener acceso al poder político porque las estructuras del racismo lo impedirían. La “arquitectura chola” que se expande en El Alto es la afirmación material y ostentosa de la existencia de una clase que conquista el poder a través del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, y que rompe las barreras del racismo, en su descolonización del Estado. Otro sector que integra esa burguesía o protoburguesía chola está constituido por los cooperativistas mineros, que se han visto beneficiados por la nueva legislación en contra de los intereses no sólo de los mineros, sino de campesinos comuneros.

²⁸ David Harvey, *El nuevo imperialismo*, Madrid, Akal, 2007.

La política del gobierno de favorecer los intereses campesinos sobre los indígenas ha propiciado un proceso de desindianización que tiene consecuencias sociales, no sólo políticas, como se expresa en el censo poblacional de 2012, en el que la autoidentificación indígena bajó de 62% a 42% en 2001.²⁹

COMENTARIOS FINALES

La separación que se afirmó en esta coyuntura es la que siempre existió entre indígenas del oriente y de occidente, entre nativos y colonizadores. Pero la apuesta inicial por el cambio en estos sectores mostró su disposición a resolver este abismo y su deseo a consolidar la alianza establecida de manera espontánea en la etapa de la movilización y afirmada en la convocatoria electoral de 2005. Los indígenas del oriente votaron por Evo Morales, distanciándose de sus lazos de subordinación con las fuerzas políticas de los terratenientes. Esa integración desde abajo entre la parte oriental y la parte occidental del país fue una posibilidad abierta a partir de las luchas y por el triunfo electoral de Evo Morales, pero la nueva élite dirigente la desechó.

El gobierno renunció a la alianza con los indígenas del oriente, apostó a la subordinación incondicional de los indígenas de tierras altas y promovió su desindianización y recampesinización, destruyendo con ello la autonomía política alcanzada por diversos sectores, asumiéndola como un peligro para su hegemonía. Las respuestas del gobierno a las demandas de los indígenas de tierras bajas parten de la incomprensión total respecto a los intereses de este sector que los llevan a la descalificación de sus demandas y del sujeto mismo. A la falta de compromiso y a la ruptura decidida desde arriba y unilateralmente de la alianza y, más tarde, a la

²⁹ ALAI, “¿Cuántos indígenas hay en el país?”, en *América Latina en Movimiento*. En <http://alainet.org/active/68153&lang=es> (fecha de consulta: 14 de octubre, 2013).

criminalización, se ha enconado el conflicto y se ha llegado a una ruptura, que los coloca como enemigos irreconciliables.

La apuesta por la polarización entre indígenas y campesinos expresa la incapacidad del gobierno, o una renuncia voluntaria, de una posición arbitral para compatibilizar, negociar y resolver desde la nueva estructura estatal el conflicto de intereses entre campesinos migrantes de tierras altas y los indígenas de tierras bajas: la decisión de respetar los latifundios del oriente³⁰ y satisfacer la demanda de tierras abriendo nuevos territorios indígenas a la colonización que se insinuaba, al menos desde 2009, muestra el alineamiento de clases decidido por el gobierno y el carácter más estructural del conflicto entre los intereses indígenas, que también son los de la reproducción de la vida de la población en su conjunto, no sólo de los habitantes de esos territorios, y los intereses del capital transnacional vinculado con la política extractivista del gobierno.

En la práctica, el gobierno de Evo Morales ha reemplazado el programa antineoliberal por uno que viabiliza y legitima la continuidad y profundiza el modelo extractivista capitalista, en su tiempo cuestionado por la movilización indígena-popular, y ahora aplicado por un gobierno “progresista”, legitimado por la ampliación de su capacidad asistencialista y la inclusión de los sectores populares en los beneficios producidos por la exportación de materias primas y, sobre todo, por la ampliación de los territorios, productos y sectores abiertos a su explotación.

En tal sentido, la fórmula de Estado plurinacional asumida por el gobierno como eje de su nuevo proyecto representa la actualiza-

³⁰ Argumenta García Linera que más de 10 millones de hectáreas en manos de latifundistas, políticos y extranjeros han sido recuperadas por el Estado y entregadas a pueblos indígenas y comunidades campesinas, poniendo fin a la cualidad latifundista del sistema agrario en tierras bajas, cuando en realidad lo avanzado fue la ejecución de los procesos iniciados en los gobiernos anteriores. Álvaro García Linera, *Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2012.

ción del modelo de Estado-nación, asumido como aspiración en la etapa desarrollista en la región, pero sin los alcances progresistas a largo plazo de aquél y sólo como mecanismo para la consolidación del poder de los nuevos grupos gobernantes y su permanencia en el ejercicio de ese poder, basados en la incorporación subordinada de los sectores indígenas y populares que pueden ser beneficiados por la ampliación de la capacidad de retención de la renta, producto de las exportaciones. Se incrementa la capacidad de retención del excedente por el Estado, sin afectar significativamente los intereses de las empresas transnacionales, por el contrario, se establece una alianza entre el nuevo grupo gobernante y el capital transnacional; se incrementa la capacidad de control sobre el territorio y sus fronteras y sobre las poblaciones que garanticen la implementación de los nuevos megaproyectos. Todo ello mediante el fortalecimiento de mecanismos autoritarios y formas consensuales de gobernabilidad a partir de procesos electorales, que no amplían la participación popular en la toma de decisiones ni en el ejercicio del gobierno, sino que la excluyen.

La derrota política de los dirigentes indígenas críticos al gobierno, luego de las marchas en defensa del TIPNIS, producto de la embestida gubernamental, no significa la desaparición material de esos sujetos y de sus respectivos proyectos de vida y de transformación del país, aunque ese sea el objetivo del gobierno, ya que no podrá volverlos a todos campesinos parcelarios, pequeños campesinos con aspiraciones a pequeños y grandes capitalistas. No son claros todavía los proyectos alternativos que ellos representan, por ahora sus acciones son, sobre todo, resistencias contra las medidas del gobierno que los afectan de manera directa.